

## CIENCIA (PSICOLÓGICA), IDEOLOGÍA Y JUSTICIA (SOCIAL)

Jorge Sobral\*

Universidad de Santiago de Compostela

Desde el variopinto mundo de la reflexión política se han proporcionado una amplísima gama de interpretaciones del concepto justicia; casi todas ellas podrían situarse en algún lugar de un continuo bipolar que clásicamente nos llevaba desde la izquierda a la derecha y que, ahora, suele delimitarse por los extremos «progresista» y «conservador». Es obvio que tal nomenclatura alberga la intención de expresar ciertos cambios respecto a la vieja distinción. Y también es evidente que en la nueva concepción un elemento clave de posicionamiento en el continuo es el mayor o menor gusto por el «intervencionismo estatal» en la esfera privada de los ciudadanos. (Ackerman, 1980; Barry, 1989; Buchanan, 1975; Rawls, 1971). Lo esencial del asunto no radica precisamente en la pluralidad de opciones ideológicas que ello conlleva, sino en que sus propuestas de naturaleza normativo-prescriptiva nacen de manera claramente subsidiaria de tales «a priori» conceptuales.

Un buen ejemplo de tales contrastes puede observarse entre la posición de Rawls (1971) y la de Nozick (1974). Mientras el primero considera que el ideal igualitario que el Estado debe garantizar para nada afecta a la libertad esencial de los ciudadanos, el segundo entiende que la situación ideal es aquella en que el Estado limite al máximo su intervención, ocupándose únicamente de proteger los derechos del individuo y velar por la validez de los «contratos» de cualquier orden que éste libremente establece. A los individuos se les debería permitir la persecución de sus intereses en mercados libres, en los que puedan disponer con absoluta libertad de sus recursos y pertenencias.

---

\* Catedrático de Psicología Social.

Tal y como afirman Tetlock y Mitchell (1993), ante reflexiones de tan largo alcance la psicología se ha contentado a menudo con enfoques menos ambiciosos desde el punto de vista conceptual, más positivistas y pragmático-«objetivos». Los psicólogos no se han ocupado tanto de las profundidades éticas en que se sustentaría una sociedad «justa», como de describir y explicar los modos de razonamiento de la gente corriente acerca de diversos problemas implicados bajo el rótulo de «justicia social»: la distribución de los recursos públicos, la solución de situaciones individuales o grupales de injusticia, el diseño de procedimientos para resolver conflictos, etc. Parece como si se hubiera producido una cierta división de tareas: mientras los sociólogos y filósofos de la política se encargarían del «fuero», los científicos de la conducta estarían mucho más pendientes del huevo. Pero a buen seguro que esto no es más que una apariencia de realidad. De hecho, la mayor parte de las consideraciones de la filosofía política son incomprensibles en su genética si no se comprenden los implícitos psicológicos en que se sustentan; al igual que hay que ser bien corto de miras para no entretener en la psicología al uso sobre determinaciones de carácter ideológico y político. Muchas de las conclusiones de las investigaciones psicológicas, aún revestidas de ropajes positivistas y apariencia de solidez empírica, no hacen reflejar sino las preferencias normativas y políticas de sus propios autores. Como se ha señalado con frecuencia, y es solo un ejemplo, estar a favor o en contra de las aproximaciones de Kohlberg al desarrollo moral tiene mucho que ver, se sepa o no se sepa, se diga o no se diga, con ser más o menos proclive a aceptar una visión kantiana versus una visión utilitarista de los conceptos morales. En lo que atañe a la justicia la investigación conductual corre el riesgo de ser un epifenómeno, una excrecencia más de la lucha política entre derecha e izquierda, corre el riesgo, en definitiva, de ser una prueba más de que aquel tan traído y llevado «fin de la historia» no se ha producido y que la confrontación ideológica más característica del siglo XX sigue gozando de una espléndida «mala salud».

En este ensayo argumentaremos acerca de la más que probable realidad de que la investigación llevada a cabo por la ciencias sociales, y en particular, por la psicología, alrededor de conceptos tales como justicia y equidad esté fuertemente contaminada por sesgos ideológico-políticos. (Acerca de este tópico puede consultarse Douglas y Wildavsky, 1982; Thompson, Ellis y Wildavsky, 1990; Tetlock y Mitchell, 1993). Tal vez el lector pueda concluir

que, al menos a efectos de configuración psicosocial, tal dimensión sigue siendo relevante.

## **UNA PEQUEÑA DOSIS DE CIENCIA Y FILOSOFÍA**

Muchos psicólogos se han amarrado al método hipotético deductivo con la misma alegría con que otros, más recientemente, lo desprecian. Entre el sectarismo de unos y otros aparecen, sin embargo, algunas cuestiones que sería de difícil deslegitimación para cualquiera de ellos: ¿Que hipótesis deben considerarse correctamente probadas? ¿De donde provienen tales hipótesis? ¿Que submétodos utilizamos para probar tales hipótesis? ¿En qué medida consideramos visiones alternativas a las de nuestro marco teórico una vez que aparecen datos inesperados que violan nuestras expectativas?. Las respuestas a estas preguntas aplicadas por cada investigador muestran de manera inexorable su proveniencia de asunciones apriorísticas que juegan un papel clave (Suppe,1977) y nos sitúan ante la enorme paradoja del poco científico comportamiento de muchos científicos. Pues bien, en este contexto la investigación conductual sobre la justicia se revela enormemente vulnerable.

La mayor parte de tales investigadores llegan a este campo cargados de fuertes convicciones políticas, generalmente a favor de causas sociales abordadas desde el prisma de la igualdad (Suedfeld y Tetlock,1991). Ello sería perfecto si no ocasionase después notables sesgos en el análisis de datos provinientes de una realidad compleja y que, a menudo, es observada con instrumentos tan «blandos» que permiten un enorme campo de proyección personal del investigador. Tal y como señalan Sniderman y Tetlock (1986), oponerse, al contestar a un cuestionario, a los programas gubernamentales de apoyo a ciertas minorías raciales, no tiene por que ser interpretado como expresión de una actitud racista, tal y como hacen Sears y Kinder(1985), dado que la misma contestación puede ser dada por alguien que: a) no cree en la eficacia de tales apoyos oficiales, b) es enormemente solidario con tales minorías, c) prefiere que sea la sociedad civil la que se encargue directamente de esa asistencia y, coherentemente con ello, d) trabaja como voluntario en alguna organizacion no gubernamental a tal efecto. Ciertas suposiciones iniciales de Sears equiparan el apoyo a programas gubernamentales más que

discutibles con una ideología antirracista. Parece un buen ejemplo de conclusiones pseudocientíficas con apariencia de verdad. Otro buen ejemplo, bien conocido en la literatura sobre psicología de la atribución es el llamado «error fundamental de atribución», es decir, una cierta tendencia a sobreestimar los factores disposicionales internos del individuo en la explicación de las conductas, al tiempo que se subestiman las causas situacionales, sociales, económicas, etc. El simple hecho de llamar «error» a una tendencia de respuesta hace suponer que aquél que califica conoce la respuesta correcta: a saber, el comportamiento es mucho más explicable en términos de circunstancias y coyunturas que por la propia responsabilidad. ¿De donde proviene tal certeza? Únicamente de un supuesto ideológico previo que no hace más que contaminar la interpretación de resultados presentados bajo la hermosa capa de la ciencia.

### **IDEOLOGÍA Y RESULTADOS «CIENTÍFICOS»: INTERPRETACIONES DE QUITA Y PON**

Veamos como los resultados científicos acerca de la caracterización psicosocial de los «progresistas» y los «conservadores» son susceptibles de interpretaciones tan reversibles como un calcetín.

Los progresistas (véase Ross, 1977) parecen ser más conscientes de las determinaciones estructurales y situacionales a que está sometido el comportamiento humano que los conservadores. Por lo tanto cometen menos el «error fundamental de atribución». Y, en consecuencia, desplazan el foco de sus explicaciones hacia el exterior del individuo y sus ansias de justicia se expresan reclamando más y más intervención estatal en auxilio de la pobreza, la marginación y la incultura. Frente a ello, los conservadores (sobre todo en ese sector neo-liberal) enfatizan el papel del incentivo personal, reclaman una ética de la responsabilidad individual e insisten en que solo se solucionarán los problemas de la marginación si se solventan sus razones de fondo y no solo sus síntomas, ya que así se perpetuaría la nefasta situación.

Los progresistas podrían tener más capacidad de empatía con los desfavorecidos y, por ello, percibirían mejor las presiones sociales a que está sometido el delincuente, su falta de oportunidades para su desarrollo

económico y personal (Merton, 1968; Berkowitz, 1972). Además, los progresistas tendrían una más profunda comprensión de los beneficios a largo plazo de la intervención gubernamental: en último término todos seríamos beneficiados del descenso de la criminalidad, la pobreza, la drogadicción, etc. También se puede pensar, y «datos» hay para ello, que los progresistas (Stone y Schaffner, 1988) son más tolerantes ante la ambigüedad, gozan de mayor flexibilidad intelectual y son mucho menos dogmáticos, más altruistas y comprensivos con ciertas desviaciones sociales.

Bello retrato. Veamos su cara oculta. Los progresistas se confundirían, al dejarse llevar por el heurístico de representatividad, al buscar soluciones colectivas a los problemas individuales. Tratarían los síntomas, no las causas subyacentes. Así, la falta de recursos económicos se solucionaría dándole a los pobres dinero hasta que se les vuelva a acabar, la falta de vivienda se solucionaría dándoles casa hasta que la abandonen o no la puedan mantener y la enfermedad se soluciona con medicamentos gratuitos hasta que su estilo de vida les vuelva a enfermar. La búsqueda de la justicia social no sería por esta vía más que la bufanda de Penélope, permanentemente tejida y destejida, pero nunca concluida. Los progresistas olvidarían ciertos aspectos esenciales de los sistemas políticos y económicos (Lipsett y Raab, 1978) que implican que los programas gubernamentales rara vez solucionan los problemas para los que fueron creados, obligando a una costosísima burocracia que consume la mayor parte de la ayuda y que además tiende a expandirse inexorablemente, alumbrando nuevas necesidades que tienen que ver consigo misma y muy poco con los fines altruistas que motivaron su nacimiento.

Pero los progresistas no solo exagerarían la eficacia de la intervención estatal sino que, además, infravalorarían la capacidad del libre mercado para ofrecer soluciones: el mercado estimularía el trabajo duro, la propia responsabilidad, la captación de la contingencia entre el propio esfuerzo y los placeres obtenidos (Seligman, 1990) y estimularía la imbricación de los propios bienes con la propia identidad, lo cual sería un magnífico sendero psicológico para la creación de empresas y puestos de trabajo. Y por si ello fuera poco, siempre cabe pensar, y argumentar «científicamente» que los progresistas no se inclinan hacia los pobres tanto por una reacción de empatía altruista hacia ellos como por una inconfesable envidia hacia los ricos y, además, no tendrían tanto interés en defender a los fracasados si no fuera por su propio miedo al fracaso. (Tetlock y Levi, 1982).

Repasemos ahora el calcetín conservador. Ellos, los conservadores, no harían tanto hincapié en las limitaciones para el progreso como en las posibilidades de que éste se produzca. A la justicia (social) jamás se llegaría desincentivando la búsqueda del individuo de sus propios márgenes de progreso (Wiseman, 1986). La respuesta conservadora a los problemas sociales evitaría el simplismo de tratar la enfermedad con pasajeros remedios para sus síntomas. No ha faltado quién, «científicamente», encuentre que recibir ayuda no hace más que producir e incrementar sentimientos de desamparo e incompetencia. (Depaulo y Fisher, 1980).

Además, los conservadores no confundirían los efectos a corto plazo de las ayudas estatales de aquellos otros más estables vinculados a la propia promoción personal a través de la movilidad social ascendente. Por si fuera poco, ellos no se quedarían atrapados en la aparente contradicción entre igualdad y eficiencia, ya que solo esta última garantizaría la primera. Y, claro está, la primera traba para el logro de la eficiencia es la perversión burocrática de los sistemas estatales de ayuda. Tales conservadores han insistido, desde hace ya no poco tiempo, en que los políticos suelen destinar dinero a gastos sociales, no tanto por su convencimiento respecto a su eficacia, como por el mero interés de promocionar sus carreras personales en relación con el poder (Buchanan y Tullock, 1962).

En este sentido, y desde un punto de vista de las capacidades cognitivas, los conservadores podrían parecer como dotados de una mayor complejidad integrativa que los progresistas, dado que tendrían una mayor capacidad para comprender, en un escenario más prolongado en el tiempo, como ciertas reformas políticas bienintencionadas tienen a menudo consecuencias inesperadas y perversas (Hadari, 1989). Y, sobre todo, estos liberal-conservadores sabrían apreciar las extraordinarias capacidades que se encierran en cada individuo, sus enormes potencialidades internas para progresar a base de esfuerzo, dedicación e inteligencia en un mercado que premiaría tales actitudes y aptitudes (Kluegel y Smith, 1986). Además, la inmersión del individuo en contextos grupales de «necesitados» solo serviría para oscurecer tales recursos, condenándolos a la inacción bajo anestésicos tales como: «en el grupo todos somos iguales» (Lane, 1986). El mercado libre produciría situaciones individuales (en sus agregados, colectivos) más justas que la planificación central guiada por ideas más o menos colectivistas.

En un plano de procesos afectivos o «calientes», los conservadores de que hablamos estarían dispuestos a que los desfavorecidos sufrieran temporalmente, en períodos de reajuste, pero no por ningún afán sádico, sino para poder mejorar su situación de manera estable a largo plazo. Ellos estarían de parte de los más necesitados de una manera más auténtica que la de los progresistas, dado que solo sus ideas posibilitarían una reducción estable de los niveles de pobreza. Su falta de empatía con el sufrimiento no sería más que una mera apariencia. Recordando a Lerner (1980), los conservadores creerían más que los progresistas en «un mundo justo», en el que cada cual es en buena medida el guionista de la película de su propia vida.

Hermoso panorama. Veamos su contraimagen. Ante todo los conservadores no comprenderían el amplísimo campo de restricciones estructurales y coyunturales (económicas, educativas, etc.) que impedirían los logros individuales, por muchos que fueran los méritos y esfuerzos de los sujetos en cuestión. Cometerían el «error fundamental de atribución», haciendo a los pobres responsables de su pobreza. El desempleo (involuntario), las discriminaciones raciales, la radical desigualdad de oportunidades, serían las causas últimas de la pobreza, y solo una poco comprensiva insolidaridad impediría a los conservadores comprenderlo así. Cuando Baron y Hershey (1988) mencionaron el «sesgo de resultado» en la evaluación de las decisiones pensaban en algo así: un mecanismo de evaluación de lo correcto del proceso a través del éxito del resultado. Además, cuando los conservadores hablan de aquellos pobres que explotan al sistema en vez de ser explotados por él, sobregeneralizarían, basándose en unos casos minoritarios, a una población general auténticamente necesitada de modo perentorio de tales programas sociales de ayuda (Nisbett y Ross, 1980).

Y, por si fuera poco, situando tanto énfasis en las posibilidades del individuo, no harían sino caer en la bien conocida «ilusión de control» (Langer, 1975). Desgracias, accidentes, enfermedades, están lejos de la capacidad de dominio personal, por muchas que sea la aptitud y el esfuerzo con que el individuo las pone en juego. Además, los liberal-conservadores a menudo simplemente, harían, sufrir a los demás, más que, como se pretende, transformar su sufrimiento en fuente de progreso. Por último, el juego libre del mercado garantizaría la equidad en ambientes «micro», en pequeñas transacciones entre particulares, pero su traslado a un ámbito «macro»

generaría enormes desigualdades económicas, al tiempo que permitiría una enorme acumulación de poder en muy escasas manos.

En el terreno «caliente», algunos suponen que la observación de la pobreza embargaría a los conservadores de sentimientos más o menos conscientes de culpa, ante los cuales reaccionarían de manera punitiva hacia aquél (el pobre) que le recuerda su bienestar. Si hacemos caso a los resultados de Kuhlman y Marshelo (1975), obtenidos con el dilema del prisionero, los conservadores serían nocivamente egoístas, competitivos y radicalmente individualistas en sus motivos sociales. En el fondo, los demás «desfavorecidos» serían vagos, incompetentes o ambas cosas a la vez. Es más, si hacemos caso a Tajfel (1982), los conservadores se protegerían cognitivamente de la pobreza ajena expulsándola mentalmente de su endogrupo, recluyéndola en un exogrupo cada vez más distante y «distintivo». Esta tendencia se agudizaría si, como ocurre en muchos casos, la pobreza se sitúa fundamentalmente en grupos étnicamente diferenciados, con lo cual el mecanismo mental de categorización grupal discriminatoria tiene el terreno abonado por la propia «naturaleza» (McConahay, 1986). En definitiva, el conservadurismo y la compasión serían antitéticamente irreconciliables.

### **¿ES JUSTO TENER QUE ELEGIR ENTRE AMBAS VISIONES DE LA JUSTICIA?**

Solo los políticos sectarios o los más fanáticos de sus seguidores estarían dispuestos a negar cualquier rasgo amable de estos retratos psicopolíticos. En ambos pueden encontrarse elementos de racionalidad y coherencia interna, y a cualquiera que se identifique con ellos sería absurdo presuponerle maldad o perversas intenciones. Estamos seguros de que se pueden buscar ejemplos de ciudadanos necesitados a los que se podría ayudar a recuperar una situación de equidad desde unos y otros presupuestos. Lo peor del doctrinarismo ideológico es la necesidad implícita que conlleva de entender todos los casos de la realidad a la luz de las mismas premisas teórico-ideológicas. La observación de la realidad queda así sometida a la necesidad de ser encajada en moldes precocinados, y, si no encaja, entonces es la realidad la que está equivocada. Hoy se escuchan miles de propuestas dirigidas hacia mantener, modificar o reducir el llamado estado del bienestar.

Se hacen muchas sugerencias «técnicas» que no pueden evitar las resonancias de los presupuestos políticos e incluso morales de que parten. Algo parecido ocurre con la investigación psicológica sobre delincuencia, siempre oscilante entre las cada vez menos explicativas aproximaciones desde la óptica de la clase social y las de la investigación en personalidad, bastante más prometedora en la actualidad. La resistencia de muchos a aceptar el papel de lo «disposicional» en la tendencia a producir comportamientos antinormativos es mucho más ideológica que técnica, motivada a buen seguro por el temor a la reaparición de los viejos supuestos lombrosianos que culpaban a la naturaleza del individuo de sus conductas antisociales.

En todos estos terrenos de investigación de las ciencias sociales hay, además, la dificultad añadida de las pasiones que tales asuntos desatan en los propios investigadores, que se parecen bastante más al militante de una causa que al viejo ideal objetivista del científico aséptico y neutral. En disciplinas como la psicología tal cosa es obvia cuando se acerca al mundo de la justicia y de aquello que sería más o menos legitimado como justo; la ambigüedad y complejidad de los objetos de estudio dejan un amplio margen a la proyección de las personales preferencias y esquemas sobre hipótesis, datos e interpretaciones. Les ocurre un poco lo mismo de lo que ocurría a aquellos jueces que nosotros mismos estudiamos y que, a la hora de sentenciar, estaban mucho más influidos por sus presupuestos progresistas o conservadores que por la evidencia analizable, lo cual les conducía a una disparidad en la severidad de sus sentencias que alcanzaba límites ciertamente escandalosos (Sobral y Prieto, 1994). Lo más interesante del asunto, y en relación con lo que aquí nos trae, es que solo un dogmático podría asegurar que una sentencia era más «justa» que otra: todas ellas estaban dentro de la legalidad, eran internamente coherentes y disponían de una lógica intachable. Entre la disyuntiva del respeto a los ideales de rehabilitación en libertad o el respeto a la seguridad de los ciudadanos, ¿que alternativa es mejor?. Son preguntas de este tipo a las que la ciencia no puede responder, dado que no existe un standard de verdad con el cual comparar la opción elegida. La decisión se toma a partir de criterios de valor, y estos no se «comprueban» en los laboratorios de las universidades; simplemente se eligen, se asumen, con la secreta esperanza de cada cual de que sean caminos que nos acerquen a la verdad, la justicia, la solidaridad...

Quizás sea imposible evaluar la racionalidad cartesiana, la moralidad y la certeza de las posiciones políticas. Cuando los psicólogos claman acerca de cuales son las causas de la pobreza, la tiranía, la delincuencia, la drogadicción..., no pueden evitar «pronunciarse» sobre los valores-guía y las metas que dirigen su acción académica y social. Por lo tanto, más valdría pensar que científicos sociales en general y psicólogos sociales en particular harían más favor a la causa siendo un poco menos apóstoles de sus causas particulares, y entendiendo que la realidad social es lo suficientemente compleja como para albergar en su seno notables contradicciones. Volvamos solo un momento a la pobreza.

En un magnífico trabajo, Jencks y Peterson (1991) analizaron cuidadosamente la pobreza de ciertos barrios marginales de grandes ciudades en la búsqueda de respuestas a la recurrente cuestión de en que medida la pobreza podría ser explicada por causas externas (desigualdad de oportunidades, extracción social deficitaria, etc) o por causas internas (vagancia, irresponsabilidad, adicción a las ayudas estatales, etc). Por desgracia la pregunta sigue sin responder, o, mejor dicho, encontró una respuesta tan cierta como insatisfactoria para los amantes de las verdades unidimensionales. Dicho en román paladino, hay casos para todos los gustos, y de manera un poco más pedante, se encontraron evidencias muy balanceadas que permitirían, según la estrategia de búsqueda de casos y de información sobre cada caso, probar cualquiera de las dos hipótesis. Quizas ello no sea muy reconfortante para el punto de vista intelectual que gusta de encontrar un mismo fármaco para dolencias bien distintas, pero nos tememos que no habrá más remedio que afinar en los diagnósticos y en las terapias, a través de bisturís que sean capaces de distinguir entre situaciones, grupos sociales, grupos familiares y profesionales, lugares de residencia... Tal vez así seamos capaces de acercarnos un poco más a aquella vieja máxima que no me atrevo a calificar de progresista o conservadora pero que parece llena de sensatez en la búsqueda de la auténtica justicia y equidad: «A cada cual según sus necesidades, de cada quién según sus capacidades». Tal vez así seamos capaces de incrementar las capacidades y reducir las necesidades en un mundo cada vez más habitable.

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

- Ackerman,B.A.(1980). *Social justice in the liberal state*. New Haven: Yale University Press.
- Baron,J. y Hershey, J.C. (1988). Outcome bias in decision evaluation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54,569-579.
- Barry,B. (1989). *Theories of justice*. Berkeley: University of California Press.
- Berkowitz,L.(1972). Social norms,feelings and another factors affecting helping behavior and altruism. *Advances in experimental social psychology*, 6,63-108.
- Buchanan,J.M.(1975). *The limits of liberty*. Chicago: University of Chicago Press.
- Buchanan,J.M. y Tullock,G. (1962). *The calculus of consent*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Depaulo,B.M. y Fisher,J.D. (1980) The cost of asking for help. *Basic and applied Social Psychology*., 1,23-35.
- Douglas,M. y Wildawsky,A.B.(1982). *Risk and culture: An essay of the selection of technical and environmewntal dangers*. Berkeley: University of California Press.
- Hadari,S.A. (1989). Value trade-off. *Journal of politics*,50,655-676.
- Knuegel,J. y Smith,E.(1986). *Beliefs about inequality*. Nueva York: Aldine de Gruyter.
- Kuhlman,D.M. y Marshelo,A.F.J. (1975). Individual differences in game motivation as moderators of preprogrammed strategy effects in prisoner's dilemma.*J. of Pers. and Soc. Psy.*,32,922-931.

- Lane,R.E.(1986). Market, justice, political justice. *American Political Science Review*, 80,383-402.
- Langer,E.J. (1975). The illusion of control. *Journal of personality and social psychology*,32, 311-328.
- Lerner,M.J.(1980). *The belief in a just world*. Nueva York: Plenum.
- Lipsett,S. y Raab,E. (1978).*The politics of unreason*. Standford: Standford University Press.
- McConahay,J.B. (1986) Modern racism,ambivalence, and the modern racism scale. En J. Dovidio y S.L. Gaertner (Eds.). *Prejudice, discrimination and racism: Theory and research*. Nueva York: Academic Press.
- Merton,R.K.(1968). *Social theory and social structure*. Nueva York: Free Press.
- Nisbett,J. y Ross,L.(1980). *Human inference: strategies and shortcomings of social judgement*. Englewood: Prentice Hall.
- Nozick,R.(1974). *Anarchy, state and utopia*. Nueva York: Basic Books.
- Tajfel,H.(1982). Social psychology of intergroups relations. *Annual Review of Psychology*,33,1-39.
- Tetlock,P.E. y Levi,A. (1982). Attribution bias: On the inconclusiveness of the cognitive-motivation debate. *Journal of experimental and social psychology*, 18,68-88.
- Tetlock,Ph.E. y Mitchell,G.(1993). Liberal and conservative approaches to justice. En B. Mellers y J.Baron (Eds.): *Psychological perspectives on justice*. Cambridge University Press.
- Thompson,M.,Ellis,R. y Widawsky,A.B.(1990). *Cultural theory*. Boluder: Westview Press.
- Rawls,J.(1971). *A theory of justice*. Cambridge,MA:Belknap.

- Ross,L. (1977). The intuitive psychologist and his shortcomings: Distortions in attributional process. *Advances in experimental social psychology*, 10,174-220.
- Sears,D.O. y Kinder,D.R.(1985). Whites' opposition to busing: On conceptualizing and operationalizing group conflict. *Journal of Personality and Social Psychology*, 48,1141-1147.
- Seligman,M. (1990). *Learned optimism*. Nueva York:Knopf.
- Sniderman,P.M. y Tetlock,P.E. (1986). Reflections on American racism. *Journal of Social Issues*, 42, 173-188.
- Sobral,J y Prieto,A. (1994). *Psicología y Ley. Un examen de las decisiones judiciales*. Madrid: Eudema.
- Stone,W.F. y Schaffner,P.E.1988). *The psychology of politics*. Nueva York: Springer-Verlag.
- Suedfeld,P. y Tetlock,P.E.(1991). Psychologist as policy advocates: the roots of controversy. En P.Suedfeld y P.Tetlock (Eds.) *Psychology and social advocacy*. Washington: Hemisphere Press.
- Suppe,P. (1977).*The structure of scientific theories*. Chicago: Chicago University Press.
- Wiseman,M. (1968). Obligation and welfare. *Policy Science*, 21,97-107.